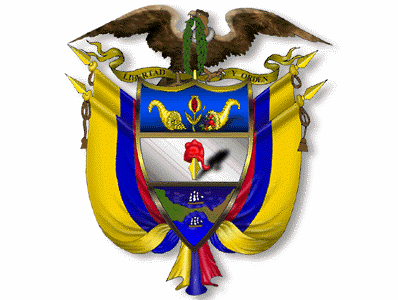
**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**

**AUTO INTERLOCUTORIO**

Santiago de Cali, veintitrés (23) de junio de dos mil veinte (2020)

|  |  |
| --- | --- |
| EXPEDIENTE | 76001-23-33-000-2020-00484-00 |
| MEDIO DE CONTROL: | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
| ACTO ADMINISTRATIVO | DECRETO 215 DEL 17 DE ABRIL DE 2020 EXPEDIDO POR EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO |

**MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ**

Procede el Despacho, una vez agotado el trámite establecido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a efectuar el control inmediato de legalidad sobre el Decreto 215 del 17 de abril de 2020 *“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA AL DECRETO MUNICIPAL N° 195 DEL 22 DE MARZO DE 2020 LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 537 DEL 12 DE ABRIL DE 2020”*, expedido por el Municipio de Cartago.

**1. ANTECEDENTES**

El Secretario Jurídico del Municipio de Cartago, mediante correo electrónico remitido el 20 de abril de 2020[[1]](#footnote-1), envió para el trámite de control inmediato de legalidad consagrado en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 *“Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”*, el Decreto 215 del 17 de abril de 2020 *“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA AL DECRETO MUNICIPAL N° 195 DEL 22 DE MARZO DE 2020 LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 537 DEL 12 DE ABRIL DE 2020”*.

El citado Decreto se profirió para:

“(…)

**ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR** que para efectos de la vigencia del Decreto Municipal N°195 del 22 de marzo de 2020 **"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA COMO JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)",** se incorpora como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto legislativo N° 537 del 12 de abril de 2020, en el entendido, que *"con ocasión de la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social y en los términos del artículo 42 de Ley 80 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19".*

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Los demás fundamentos fácticos y jurídicos del Decreto Municipal N° 195 del 22 de marzo de 2020 continúan vigentes.

(…)”.

La anterior decisión, tuvo como soporte las siguientes consideraciones:

“(…)

Que el Alcalde del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, expidió el Decreto Municipal N°195 del 22 de marzo de 2020 *"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA COMO JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)".*

Que entre los hechos determinantes de la decisión administrativa debidamente probados, se encuentra el siguiente: *"(...)Que la situación epidemiológica causada por el COVID-19, se encuentra en aumento de acuerdo a las cifras comunicadas por el Ministerio de Salud y de Protección Social, poniendo en riesgo el orden público, la salubridad pública y la adecuada prestación de los servicios públicos en el inmediato futuro por la referida situación excepcional de calamidad en el Departamento del Valle del Cauca, en especial, el Municipio de Cartago, lo cual, hace necesario, conveniente y oportuno declarar la* *urgencia manifiesta para evitar males presentes y futuros inminentes".*

Que entre los antecedentes legales de la citada declaratoria de urgencia manifiesta, se encuentran la Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, *"Por la cual se declara la emergencia sanitaria expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Decreto Legislativo N° 417 del 17 de marzo de 2020 "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional".*

Que en relación con la urgencia manifiesta, el día 20 de marzo de los corrientes, el Gobierno Nacional, expidió el Decreto legislativo N°440 del 20 de Marzo de 2020, estableciendo en el artículo 7, lo siguiente:

*"(.. .) Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la* ***declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales,*** *para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente. Con el mismo propósito, las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa esta clase de bienes y servicios". (Subraya y negrilla fuera de texto).*

Que el municipio de Cartago Valle del Cauca expidió el decreto municipal No. 195 del 22 de marzo de 2020 **"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA COMO JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)".**

Que, en este sentido, el artículo primero del Decreto Legislativo No 417 del 17 de marzo de 2020, determina, que el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, se declaró por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia del citado decreto legislativo, es decir, hasta el 16 de Abril de 2020.

Que posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto legislativo N°537 del 12 de abril de 2020, estableciendo en el artículo 7:

*"Artículo 7. Contratación de urgencia.* ***Con ocasión de la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social y en los términos del artículo 42 de Ley 80 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales*** *para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente. Las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa los bienes y servicios enunciados en el inciso anterior (…)”. (Subraya y negrita fuera de texto)*

Que conforme las anteriores disposiciones normativas, se entiende, que a partir de la vigencia del artículo 7 del Decreto legislativo N° 537 del 12 de abril de 2020, ya no es con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica que se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta sino que es con ocasión de la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social, teniendo la misma un límite temporal hasta el 30 de Mayo de 2020”.

Que en este orden de ideas, continúan las circunstancias justificativas de la declaratoria de urgencia manifiesta con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la **Pandemia del coronavirus COVID-19.**

Que no obstante lo anterior, se debe precisar, conforme al principio de legalidad, que en los términos de los numerales 2 y 4 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, ante un posible decaimiento o pérdida de fuerza de ejecutoria del Decreto Municipal N° 195 del 22 de marzo de 2020, por el vencimiento del término de vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional el día 16 de abril de los corrientes, se hace necesario incorporar al citado acto municipal, lo dispuesto en el citado artículo 7 del Decreto legislativo N O 537 del 12 de abril de 2020[[2]](#footnote-2)

(…)”.

**2. INTERVENCIONES**

**MINISTERIO PÚBLICO**

La Procuradora 19 Judicial II para asuntos administrativos, delegada ante esta corporación, conforme lo señala el numeral 5 del artículo 185 del CPACA, emitió concepto dentro del presente asunto, solicitando abstenerse de ejercer control automático de legalidad respecto al acto administrativo objeto de estudio.

Arguyó, que el Decreto 215 del 17 de abril del 2020, está inmerso dentro del Decreto 195 del 22 de marzo de 2020, no siendo posible entenderlo, sino a la luz de aquel.

Que como quiera que, para el estudio del presente control automático de legalidad, únicamente está sometido el Decreto 215 de 17 de abril del 2020, no es posible adelantar el mismo, pues existiría un inepto control, análogo de la inepta demanda, lo cual es un vicio previo que inhibe al juzgador de la posibilidad de emitir decisión de fondo.

**3.- PROBLEMA JURIDICO**

Corresponde al Despacho determinar, en primer lugar, si es posible emitir un pronunciamiento de fondo en ejercicio del medio de control inmediato de legalidad frente al Decreto No. 215 del 17 de abril de 2020, expedido por el **Municipio de Cartago.**

En caso de resultar procedente, la Sala deberá establecer si las medidas adoptadas en dicho acto administrativo se ajustan a los requisitos de índole formal y material que se han establecido para efectos de impartir legalidad a un Decreto promulgado con ocasión a la declaratoria del Estado de Excepción.

**4-. TESIS DE LA SALA**

El Despacho declarará la terminación del proceso por falta de competencia de este Tribunal Administrativo para ejercer el control inmediato de legalidad sobre el Decreto No. 215 del 17 de abril de 2020, al no cumplir éste con las características que exige el artículo 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; de manera que no puede entonces dictarse válidamente una sentencia.

**5-. CONSIDERACIONES**

El artículo 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994, *“Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia”*, dispone que las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los Decretos Legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control automático de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.

El Presidente de la República, en el marco de los Estados de Excepción, expide diferentes clases de normas, a saber: (i) el Decreto que declara el Estado de Excepción; (ii) los Decretos que lo desarrollan adoptando medidas para conjurar la crisis y (iii) los Decretos que reglamentan los que adoptan las medidas[[3]](#footnote-3), estos últimos, objeto de control inmediato de legalidad.

A su turno, el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, alude al control automático de legalidad, en los siguientes términos:

*“Artículo 136. Control inmediato de legalidad: Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los Decretos Legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán control inmediato de legalidad, ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este código.*

*Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento”.*

Conforme a esta disposición, el control inmediato de legalidad ejercido por los Tribunales Administrativos procede respecto de: (i) las medidas de carácter general emanadas de autoridades territoriales; (ii) dictadas en ejercicio de la función administrativa y (iii) como desarrollo de los Decretos Legislativos durante los Estados de Excepción.

La Corte Constitucional, en sentencia C-179 de 1994[[4]](#footnote-4) declaró exequibles los incisos primero y segundo del artículo 20 de la Ley 137 de 1994, que consagra el control automático de legalidad de los actos administrativos que se expidan como desarrollo de los Decretos Legislativos dictados por el Presidente de la República durante los Estados de Excepción, precisando que este control constituye una limitación al poder de las autoridades administrativas, y es una medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicación de normas ilegales.

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia del 16 de junio de 2009[[5]](#footnote-5), señaló las principales características de este medio de control, a la luz de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Al respecto, consideró que: i) se trata de un proceso judicial; ii) es un control automático e inmediato, porque debe remitirlo la autoridad que expidió el Decreto reglamentario o acto administrativo general a la Corporación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición, para que se ejerza el examen de legalidad correspondiente; iii) el control no impide la ejecución de la norma, pues hasta tanto se anule permanece dotada de la presunción de validez que acompaña a los actos administrativos; iv) no es requisito que se encuentre publicado en el diario o gaceta oficial para que proceda el control, toda vez que una cosa es la existencia del acto y otra su publicidad con fines de oponibilidad y exigibilidad; v) se trata de un control oficioso que no opera por vía de acción, es decir, no está sujeto a la presentación de una demanda contenciosa que demarque los límites para el juicio de la legalidad del acto; vi) el control es integral en relación con los Decretos Legislativos respectivos y el artículo 215 de la Constitución Política, toda vez que, pese a que la norma no lo señala en forma expresa, necesariamente debe ser así, pues si no opera por vía de acción resulta lógico que el juez asuma el control completo de la norma.

Así las cosas, el control inmediato de legalidad está instituido para garantizar el orden legal y constitucional del Estado de Derecho en condiciones de anormalidad estatal e institucional, porque los poderes del ejecutivo se maximizan legítimamente y las autoridades, en ejercicio de la función administrativa, se ven avocadas para concretar en la realidad aquellos enunciados abstractos que materializan la legislación en el Estado de Excepción.

En esas condiciones y previo a verificar los requisitos de procedencia, se debe estudiar y determinar si el Decreto No. 215 del 17 de abril de 2020, es un acto susceptible de control inmediato de legalidad, en atención a los siguientes aspectos:

Conforme lo ha señalado en reiteradas oportunidades el Consejo de Estado[[6]](#footnote-6), la proposición jurídica incompleta como requisito de validez de la demanda, impide el ejercicio de la capacidad decisoria del juez frente al litigio propuesto, pues el acto demandado no es autónomo, por encontrarse en una inseparable relación de dependencia con otros no impugnados que determinan su contenido, validez o su eficacia.

En virtud de lo anterior, ha considerado la citada Corporación que, el conjunto de actos administrativos que constituyen una unidad jurídica, delimitan necesariamente el marco de decisión del juez administrativo por la identidad y la unidad de su contenido y de sus efectos jurídicos, sin que puedan separarse al abordar el análisis de legalidad correspondiente[[7]](#footnote-7).

En efecto, uno de los presupuestos en que se ha reconocido la configuración de una proposición jurídica incompleta, es cuando el acto acusado no es autónomo porque se encuentra directamente relacionado con otro u otros no impugnados que determinan su contenido, validez o eficacia, eventos en los que le resultaría imposible emitir una decisión de fondo al operador judicial.

Concretamente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que la proposición jurídica incompleta se puede configurar en dos circunstancias, de forma alternativa o sumada, así: i) cuando el acto acusado torna lógicamente imposible la decisión de fondo debido a una irreparable ruptura de su relación con la causa *petendi*, o ii) cuando el acto demandado no es autónomo por encontrarse en una inescindible relación de dependencia con otro u otros no impugnados que determinan su contenido, validez o su eficacia, eventos en los que como se expresó resulta imposible emitir una decisión de fondo para el Juez[[8]](#footnote-8).

Ahora bien, concretando lo anterior al *sub lite,* se tiene que el acto administrativo objeto de estudio, esto es, el Decreto No. 215 del 17 de abril de 2020, mediante el cual se adicionó el DecretoNo. 195 del 22 de marzo de 2020, en cuanto a las circunstancias que justificaron la declaratoria de urgencia manifiesta, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus -COVID-19, en el municipio de Cartago.

A través del citado DecretoNo. 195 del 22 de marzo de 2020, la administración municipal declaró la urgencia manifiesta, con el propósito de adoptar las acciones necesarias para prevenir, identificar en forma temprana, diagnosticar y, atender la pandemia mundial del coronavirus -COVID-19, con el despliegue de los mecanismos que se consideren necesarios para evitar su propagación en dicho ente territorial.

En tal sentido y con posterioridad, el Decreto No. 215 del 17 de abril de 2020, incorporó al citado acto administrativo, el artículo 7 del Decreto Legislativo No. 537 del 12 de abril del año que transcurre, dejando vigente así mismo, los demás fundamentos fácticos y jurídicos del referido Decreto No. 195 del 22 de marzo de 2020.

Por manera que, es evidente que la declaración de urgencia manifiesta en dicho ente territorial, en virtud del coronavirus -COVID-19, se materializó a través de los dos actos administrativos en cita, esto es, el DecretoNo. 195 del 22 de marzo de 2020 y el Decreto No. 215 del 17 de abril de 2020, entre los cuales existe una relación inescindible, pues el segundo acto pende necesariamente del primero.

Esto por cuanto como quedó referenciado en precedencia, el decreto en comento, tuvo como fin determinar, que la situación que daba lugar a la declaratoria de urgencia manifiesta en el municipio de Cartago, efectuada mediante Decreto 195 del 22 de marzo de 2020, ya no tenía su génesis en la declaratoria del estado de emergencia, social y ecológica, sino con ocasión de la declaratoria del estado de Emergencia Sanitaria, declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social.

En este orden de ideas y en aplicación del principio constitucional de unidad de materia, en el presente caso debió acumularse el conocimiento de ambos decretos para no ejercer el control inmediato de legalidad en forma separada y así, salvaguardar el principio de seguridad jurídica.

No obstante, ello no fue posible, pues para la fecha en que se avocó el conocimiento del Decreto No. 215 del 17 de abril de 2020[[9]](#footnote-9), el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca ya había resuelto no avocar el conocimiento del Decreto195 del 22 de marzo de 2020[[10]](#footnote-10).

Debe concluirse entonces que, para la Sala no es posible emitir un pronunciamiento de fondo frente al Decreto No. 215 del 17 de abril de 2020, esto es, si el mismo se encuentra o no ajustado a derecho conforme a los requisitos de índole formal y material que se han establecido para efectos de impartir legalidad a un Decreto promulgado con ocasión a la declaratoria del Estado de Excepción.

Lo anterior, tras considerar que en este caso lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, es decir, que al no haberse avocado el conocimiento del acto administrativo principal (Decreto195 del 22 de marzo de 2020), y no haberse emitido un pronunciamiento de fondo frente a su legalidad, en los términos antes explicados, igual suerte debe correr el acto administrativo que le hizo una incorporación (Decreto No. 215 del 17 de abril de 2020).

Recuérdese en este punto que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la decisión adoptada debe garantizar el principio constitucional de unidad de materia y referirse a todos los actos administrativos que reflejen la voluntad de la administración frente a una situación jurídica, particular y concreta.

Si bien en principio el Decreto bajo examen fue avocado por esta Corporación, para ejercer el control inmediato de legalidad de que trata el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, analizado nuevamente y con el rigor que requiere el estudio de estos procesos en Sala Plena, es claro que el mismo no puede estudiarse en sentencia mediante el medio de control inmediato de legalidad, tal como ya se ha explicado.

Rememórese que, de conformidad con las reglas de competencia establecidas por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los Tribunales Administrativos conocerán en única instancia, del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos,por autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.

En este caso, se advierte que al no cumplir el Decreto *sub examine* con las características que exige el control inmediato de legalidad de que trata el artículo 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal Administrativo carecía de competencia para asumir su estudio bajo la égida del citado mecanismo de control.

En consecuencia, se declarará la terminación del proceso por falta de competencia.

**6. DECISION**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Unitaria de Decisión,

**RESUELVE:**

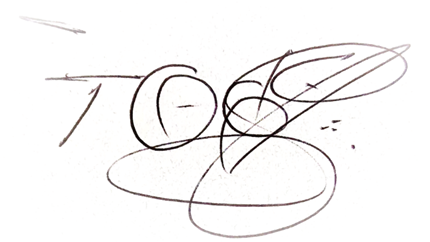
**PRIMERO: DECLARAR** la terminación del presente proceso por falta de competencia para ejercer el control inmediato de legalidad sobre el Decreto No. 215 del 17 de abril de 2020, expedido por el **MUNICIPIO DE CARTAGO,** conforme a los argumentos expuestos en precedencia.

**SEGUNDO:** Por Secretaría, **NOTIFÍQUESE** esta providencia por vía electrónica al Alcalde del Municipio de Cartago y al señor Agente del Ministerio Público.

**TERCERO:** Publíquese esta decisión, en las páginas web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para conocimiento de la comunidad.

**CUARTO: ORDÉNASE** al señor Alcalde del Municipio de Cartagoo a quien él delegue para tales efectos, que a través de la página web oficial de esa entidad municipal, se publique este proveído a fin de que todos los interesados tengan conocimiento de esta decisión. La Secretaría del Tribunal requerirá a la referida entidad estatal para que presente un informe sobre el cumplimiento de esta orden.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**



**FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ**

Magistrado

1. Valga precisar que este asunto fue repartido el 20 de abril de 2020 y fue remitido por la Secretaría del Tribunal al correo institucional del suscrito magistrado, el 21 de abril del año que transcurre. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Constitucional, sentencia C- 731 de 2005: "(...) Desde el punto de vista fáctico, las presunciones están conectadas, entonces, con la posibilidad de derivar a partir de un hecho conocido una serie de consecuencias que se dan como ciertas o probables ya sea porque la operación o el acto de presumir se sustenta en máximas generales de experiencia o porque se funda en reglas técnicas" [↑](#footnote-ref-2)
3. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 16 de junio de 2009, exp. 11001-03-15-000-2009-00305-00 (CA). [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Constitucional, M.P. Carlos Gaviria Diaz [↑](#footnote-ref-4)
5. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00305-00(CA) Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, reiterada en sentencia del 1º de julio de 2010, M.P. María Claudia Rojas Lasso [↑](#footnote-ref-5)
6. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero Ponente: **RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS**, providencia fechada el trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), dentro del proceso identificado con la radicación número: 66001-23-33-000-2016-00175-01(1111-18). [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibídem. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente: **SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ**, providencia proferida el cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), dentro del proceso identificado con radicación N° 11001-03-25-000-2014-00044-00(0096-14). [↑](#footnote-ref-8)
9. Auto Interlocutorio proferido el 23 de abril de 2020 con ponencia del Magistrado Fernando Augusto García Muñoz. [↑](#footnote-ref-9)
10. Auto Interlocutorio proferido el 30 de marzo de 2020 con ponencia del Magistrado Óscar Alonso Valero Nisimblat. [↑](#footnote-ref-10)